



LEGISLATURA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

🌲 Por favor, sólo imprima este documento si es absolutamente necesario.

PODER LEGISLATIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Deán Funes 94 - Tel. 0351 - 4203400

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

30º REUNIÓN

28º SESIÓN ORDINARIA

20 de agosto de 2014



- Documento Oficial provisto por el Cuerpo de Taquígrafos.
- Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.

–En la ciudad de Córdoba, a veinte días del mes de agosto de 2014, siendo la hora 16 y 53:

-1-

IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 55 señores legisladores, declaro abierta la 28ª sesión ordinaria del 136º período legislativo.

Invito a la señora legisladora Carmen Perugini a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Perugini procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2-

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sra. Presidente (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidente (Pregno).- Aprobada.

-3-

ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en cada banca y en las netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.

Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señora presidenta, solicito la incorporación de toda la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos como coautora del proyecto 14821/L/14

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Matar.

Sra. Matar.- Señora presidenta, solicito que se incorporen como coautores del proyecto de declaración 14817 a la Comisión Agricultura, al legislador Schiavoni y al legislador Echepare.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señora presidenta, solicito que se incorpore como coautor del proyecto 14804 al legislador García Elorrio.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legisladora.

Tiene la palabra el señor legislador Sosa.

Sr. Sosa.- Señora presidenta, solicito que el proyecto de ley 14614/E/14 sea girado también a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.

Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, legislador.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 36 y 79 al 154 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 29ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 36 y 79 al 154 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 29ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 37 y 38 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 30ª sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 37 y 38 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 30ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 39 al 67, 69 al 78 y 155 al 160 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta al comisión, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 35, 39 al 67, 69 al 78 y 155 al 160 del Orden del Día.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.

Se incorporan al Orden del Día de la 31ª sesión ordinaria.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos, para dar tratamiento, en primer lugar, a los proyectos de ley 14583/L/14, 9567/L/12 y 14407/14 compatibilizados, despachados por las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Previo al inicio del tratamiento de los proyectos compatibilizados, quiero informarles que se encuentran acompañándonos en este recinto integrantes de Unidos con Lazos de Amor de Córdoba Capital; el grupo de padres con fines adoptivos de Laboulaye y miembros de Un Gesto de Amor, grupo de adopción Río Tercero. Les damos la bienvenida. Gracias por estar aquí acompañando a la Legislatura de la Provincia de Córdoba en un día que para todos ustedes y los legisladores reviste la misma importancia.

Muchas gracias. (Aplausos).

Se encuentra en Secretaría una nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley: 14583/L/14, 9567/L/12 y 14407/L/14, compatibilizados, despachados por las comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 20 de agosto de 2014.

Señora Presidenta del

Poder Legislativo

de la Provincia de Córdoba

S. / D.

De mi consideración:

Por la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 14583/L/14, compatibilizado con los proyectos 9567/L/12 y 14407/L/14, de creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos y de adhesión a la Ley nacional 25854, Registro Único de Aspirantes de Guarda con Fines Adoptivos.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Sergio Busso

Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída por Secretaría.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.

Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.

Sra. Ponte.- Señora presidenta, señoras y señores legisladores, voy a fundamentar el proyecto de ley 14583/L/14, compatibilizado con los proyectos 9567/L/12 y 14407/L/14, de adhesión a la Ley nacional 25854, por la cual se crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

Previamente, quiero manifestar que el presente proyecto compatibilizado fue despachado en forma unánime por las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

En verdad, este tema tuvo varias veces tratamiento en la Comisión de Solidaridad, existiendo también otros proyectos anteriores que oportunamente fueron tratados en comisión.

Así también, quiero manifestar que como resultado de consultas sobre la procedencia, a fines de junio de este año, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia remitió nota a esta Legislatura solicitando sea considerada la adhesión, por parte de la Provincia de Córdoba, a la Ley nacional 25854, sancionada en el año 2003, llegando su reglamentación por decreto del año 2009, siendo quizá ello lo que dio a la referenciada ley un marco reglamentario que dejó claro el alcance general y las virtudes de este Registro Único Nacional.

Debemos recordar que nuestro ordenamiento provincial, desde el año 2001, a través de la Ley 8922, creó el Registro Único de Adopciones, cuya formación, mantenimiento y actualización se encuentra a cargo del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, teniendo dicho Registro su asiento en la Ciudad de Córdoba, con competencia en todo el ámbito de la provincia.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Así, son funciones de nuestro Registro provincial gestionar y mantener una nómina actualizada de información sobre menores de edad que se encuentran en estado de adoptabilidad, lista única de pretensos adoptantes, nómina de los menores de edad respecto de los cuales se ha discernido la guarda con fines de adopción entre los juzgados con competencia en la materia; llevar un archivo que contenga las copias de las resoluciones de adopción que realice cada juzgado, a los fines de posibilitar el cumplimiento de lo prescripto por el artículo 328 del Código Civil, esto es, el derecho del adoptado de conocer su origen biológico una vez cumplida su mayoría de edad.

Asimismo, a través de una serie de acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior de Justicia se resolvió la creación de subregistros, que son parte del Registro Único de Adopciones –como, por ejemplo, el subregistro de niños de cero a un año de edad, de uno a tres años, de tres a cinco años y de cinco a diez años–, y que fueron creados, atento a la experiencia institucional recogida, a fin de distinguir en la composición del Registro Único de Adopciones subregistros no excluyentes, de modo de mantener una relación razonable y adecuada entre los pretensos adoptantes y la población de niños en estado de adoptabilidad, teniendo en cuenta la composición y necesidades de cada subregistro.

Por eso, esta propuesta –de adhesión a la Ley nacional de Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos– permitirá constituir una red informática que interconectará los registros provinciales para poder brindarles a todos los niños del país, que la necesiten, la posibilidad de guarda familiar con fines adoptivos en su provincia, en su región o –si lo primero no fuera posible– en otra provincia argentina.

Esta tarea siempre quedará en manos del juez del lugar de domicilio del niño, quien será el encargado de tomar decisiones con relación a la guarda, ya sea en su provincia –de ser posible– o en otra –cuando sea necesario–, haciendo uso del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.

En tal sentido, debe quedar en claro que con esta adhesión se logrará la unificación de la información –contenida en los registros locales– en un solo registro nacional, permitiendo que la inscripción en una jurisdicción local sirva para todas las demás posibilidades que se presenten, de manera que haya más oportunidades para aquellos niños en condiciones de adoptabilidad, ampliando el espectro de posibles adoptantes y, de ese modo, atendiendo las necesidades de aquellos niños en cuyas jurisdicciones no encuentran una familia y pueden encontrarla en una jurisdicción vecina, permitiendo la expansión de la búsqueda de soluciones al territorio del resto de las provincias argentinas a fin de solucionar la problemática de niños en estado de adoptabilidad que no encuentran respuesta en el territorio provincial.

Por ello, teniendo como premisa que siempre debe primar el interés supremo del niño –y ante el hecho que a veces nos encontramos frente a situaciones de gran complejidad, en que se ven agotadas las posibilidades de que un niño permanezca con sus padres biológicos–, se pasa a considerar la posibilidad de otorgar la guarda con fines adoptivos para que aquellas personas que desean adoptar puedan darle a un niño todo el amor, el acompañamiento y el cariño que merece, constituyendo entonces este Registro –de alcance nacional– una posibilidad de suplir las carencias que tienen algunos niños que no encuentran cobijo en la provincia en la que se encuentran.

Sabemos de las peregrinaciones de aquellos padres que quieren ser adoptantes y hemos conocido muchas historias de familias que abren sus corazones para brindarles un hogar a los niños que no lo tienen. Por eso, este trabajo conjunto de todas las provincias de nuestro país posibilitará construir una red informática que interconecte todos los registros provinciales, asegurando que los aspirantes a guarda con fines de adopción realicen una única inscripción en la jurisdicción de su propio domicilio y tenga validez para acreditar su postulación en todas las provincias adheridas al Registro, agilizando y economizando los trámites al evitar la suscripción en múltiples registros.

Quizás el nombre de “Registro Único” no sea el más adecuado y pueda generar alguna confusión, por lo que deberíamos hablar -en todo caso- de un “Registro Universal”, ya que existen y seguirán existiendo los registros locales. También debe quedar en claro que siempre la prioridad será para los pretensos adoptantes de la misma jurisdicción del menor en situación de adoptabilidad, respetándose, por supuesto, el orden de prioridades según la fecha de inscripción de los pretensos adoptantes pudiendo, excepcionalmente, apartarse el juez de ese orden con carácter definitivo, fundamentalmente, valorando el interés superior del niño -como lo expresa el artículo 6º de la Ley provincial 8922 y el artículo 12 de la Ley 25854-, priorizando las solicitudes de aspirantes a guardas con fines de adopción de personas menores de más de cuatro años, grupos de hermanos y menores con capacidades diferentes o con patologías físicas o psíquicas.

Para terminar, quiero destacar la tarea de quienes nos acompañan en este recinto, tanto del grupo Unidos con Lazos de Amor, de la ciudad de Córdoba, como del grupo Padres con Fines Adoptivos, de la ciudad de Laboulaye, y del grupo Un Gesto de Amor, de la ciudad de Río Tercero, quienes se dedican a apoyar a familias de adoptantes y en espera de serlo, promoviendo la transparencia en la legalidad del proceso de adopción, usando las experiencias vividas para apoyar y acompañar a nuevas familias adoptantes, para lograr que aquellos niños que se encuentran en situaciones muy vulnerables puedan encontrar una familia y así encarar juntos las dificultades que les toca vivir, priorizando siempre las posibilidades de que un niño encuentre a su familia. Por eso, quiero reconocer y agradecerles muy especialmente la tarea que llevan adelante día a día.

Por los motivos expresados, y en el convencimiento de que estamos dando un paso hacia delante para lograr que más niños se encuentren con sus familias, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Sánchez.

Sra. Sánchez.- Señora presidenta, señores legisladores: mediante la Ley provincial 8922 se creó en la Provincia de Córdoba el Registro Único de Adopciones, que depende del Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia.

Entre los objetivos de dicha ley está, precisamente -y conforme lo establece su artículo 4º-, la inscripción de aspirantes a guarda con fines de adopción, y expresamente determina que deben inscribirse en el registro correspondiente a su domicilio real. Subrayo lo de “domicilio real” porque, precisamente, al adherirnos a la ley nacional lo que se pretende es globalizar dicha inscripción y así, conforme lo establece en forma clara y precisa el artículo 3º de la ley nacional, las provincias, previa firma de convenios con el Ministerio de Justicia, podrán disponer de una terminal de enlace informático con el registro a los efectos de acceder a la información contenida en dicho registro.

Si bien se puede tener la información a través de dichos convenios, es buena la adhesión para intercambiar dicha información respaldada por una ley, máxime cuando estamos hablando de menores en estado de adopción.

Sra. Presidenta (Pregno).- Le pido a los señores legisladores que, por favor, guarden silencio.

Continúa en el uso de la palabra la legisladora Sánchez.

Sra. Sánchez.- Además, creo que es fundamental, en esta adhesión, la aplicación del artículo 13 de la ley nacional, que dispone que la resolución que efectivice la guarda deberá ser comunicada al Registro Central, y así también cualquier circunstancia que cause la exclusión de los aspirantes; esto es fundamental ya que se busca proteger, de manera nacionalizada, global y extensa, la entrega de los menores en adopción.

Si bien -como hablamos con los compañeros de bloque- el desarraigo del menor de su territorio puede resultar un riesgo, todo es superado cuando el interés supremo, en miras de ese menor, es nada más ni nada menos que proporcionarle un hogar con todo lo que ello implica: amor, protección, cariño, resguardo y lazos afectivos permanentes, que son fundamentales, señora presidenta, más en estos casos de menores que han visto rotos esos lazos.

Por eso, señora presidenta, todo lo que signifique mayor posibilidad de que los menores sean adoptados y mayor resguardo en su integridad física implica, desde nuestro bloque, el acompañamiento a dicha adhesión.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.

Sra. Caffaratti.- Señora presidenta: como ya han remarcado los legisladores que han hecho uso de la palabra, esta ley que hoy tratamos tiene, ante todo, el objeto de proteger y promover los derechos de niños, niñas y adolescentes en el marco de la Convención de los Derechos del Niño y las Leyes nacional y provincial de Protección Integral de Niño, Niñas y Adolescentes.

En este marco, la presente iniciativa de ley propone la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 25854, por la que se crea el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, con asiento en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, sancionada el 4 de diciembre de 2003.

En el año 2012, durante los primeros meses de mi labor como legisladora, y a solicitud de numerosas organizaciones que trabajan en el tema de la adopción desde la perspectiva de los derechos del niño, comprendí la importancia de adherir a la ley nacional, ya que su principal objetivo es ampliar las oportunidades de los niños para poder ejercer un derecho básico y fundamental que es vivir y crecer en una familia.

Esto nos impulsó a presentar en ese momento el proyecto de ley 9567, que hoy se compatibiliza con otros proyectos del bloque de Unión por Córdoba y del legislador Muñoz.

Sin duda, es nuestra responsabilidad como legisladores y como adultos generar los recursos y mecanismos para ampliar y hacer efectivos los derechos que implican bienestar para la sociedad y, prioritariamente, para los niños, más aún si tenemos en cuenta los datos de relevamientos realizados en el año 2012 por la UNICEF, que nos señalan que en todo el país existen 14.675 niños sin cuidados parentales y que en la Provincia de Córdoba 1107 niños privados de cuidados parentales están hoy alojados en distintos establecimientos públicos o privados.

La ley de adhesión que se está por sancionar implica un avance fundamental en este sentido, ya que pone en primer lugar al niño y, a su vez, no restringe las facultades de la jurisdicción provincial sino que unifica la información de todas ellas, evitando la duplicidad de inscripciones de postulantes a guarda con fines adoptivos.

Es decir, la presente adhesión permite garantizar que se agoten las posibilidades de los niños, primero, en su lugar de residencia, luego, si esto no es factible, recurrir a otros postulantes de la región o del país a fin de asegurar el derecho del niño a tener una familia; que las personas que deseen adoptar realicen una inscripción única en su jurisdicción, evitando el peregrinaje por los distintos juzgados y provincias; la articulación de los distintos registros provinciales, es decir, asegurar a los aspirantes a guarda con fines de adopción que una inscripción única en la jurisdicción de su propio domicilio tenga validez para acreditar su postulación en todas las provincias, evitando de esta manera que tengan que inscribirse en múltiples registros. Por último, permite transparentar y agilizar los trámites de adopción.

Por todo lo expuesto, y entendiendo que las normas que regulan la adopción deben ser siempre vistas a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, velando por su interés superior y, como lo recalca nuestra jurisprudencia reiteradamente, es el niño el que tiene derecho a tener una familia y no los adultos quienes tienen derecho a exigir un niño para adoptar.

Esta adhesión está en consonancia con el espíritu de la Ley provincial 8922, que crea el Registro Único de Adopciones en el ámbito de la Provincia de Córdoba, y a los efectos de armonizar la normativa provincial vigente sobre la materia con la Ley nacional 25854 y su Decreto reglamentario 1328 del 2009, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de adhesión, adelantando, por supuesto, el apoyo del bloque de la Unión Cívica Radical.

Antes de finalizar quiero agradecer públicamente a Daniel Roera, del Grupo de Padres con fines de adopción de Laboulaye, y a “Laly” Jaime, de Un Gesto de Amor, de Río Tercero, que hoy nos acompañan junto con el grupo de personas presentes, que han sido los verdaderos impulsores de este proyecto. Su tenacidad, su compromiso y su incansable trabajo por el derecho de los niños a vivir en una familia fueron el condimento indispensable para que este proyecto se convierta hoy en ley.

También quiero hacer un agradecimiento por el apoyo y acompañamiento a los miembros de mi bloque y de los distintos bloques que conforman la Comisión de Desarrollo Social y Derechos Humanos que en todo momento se mostraron comprometidos con la temática.

Por último, me parece importante resaltar que, como todas las leyes, esta tiene una intención, un espíritu, que muchas veces no se refleja en la letra fría de la norma. La ley que tratamos hoy bien podría leerse como una simple adhesión, como una norma más. Sin embargo, el espíritu en el que hemos coincidido todos los miembros de la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos, así como los autores de los tres proyectos que se han compatibilizado, no ha sido otro que el de acortar el camino, generar un instrumento que facilite, garantice y amplíe las posibilidades de los niños que se encuentran en situación de adoptabilidad a vivir en el seno de una familia.

Nada más, muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señora presidenta: deseo adelantar el voto positivo al proyecto en tratamiento. La adhesión a esta ley nacional, sin duda alguna, constituye un paso adelante para el funcionamiento del instituto de la adopción y, con ello, de los derechos de cientos de niños y niñas que, por distintas circunstancias, no han podido desarrollarse en su medio familiar de origen.

Como se ha dicho, y lo comparto, el proyecto encuentra fundamentos, entre otros, en el artículo 20 de la Convención de los Derechos del Niño, que prevé que los niños, temporal o permanentemente privados de su medio familiar o porque un superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a protección y asistencia especiales del Estado.

No es de modo alguno novedad que en nuestro país la mayoría de las adopciones se realiza por mecanismos que, indudablemente, generan -al menos- polémica, como es el caso de la entrega directa, un discutido mecanismo que se da en muchas provincias y que ha permitido que familias biológicas y adoptivas hagan una especie de acuerdo particular previo, en especial con niños recién nacidos, y luego, en algunos casos, los tribunales se limitan a revisarlo y eventualmente convalidarlo.

Señora presidenta, finalizo diciendo que no dudo de que se trata de un paso adelante; y sin perjuicio de ello, hay mejoras que venimos reclamando en terrenos que no están estrictamente vinculados al tema hoy en tratamiento, como es el relacionado al instituto de la adopción, pero que tienen que ver con algunas asignaturas pendientes del Estado provincial, como es el caso de las deudas que se mantienen con las OGAs o, en todo caso, con las limitaciones que tiene la SeNAF,

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

particularmente por carencias respecto a su personal, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, que no permiten esbozar una política en materia de protección de derechos justamente para quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social.

Sin perjuicio de ello, y quedando esto como una materia pendiente a discutir en el futuro, adelanto mi voto favorable al proyecto que es motivo de tratamiento.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.

Sr. Muñoz.- Gracias, señora presidenta.

Me voy a expresar en nombre de mi bloque. Venimos a tratar esta propuesta legislativa de Unión por Córdoba que, considero, nos da la posibilidad de realizar un trabajo que podría explicarse con la metáfora del “círculo virtuoso”. En principio, somos capaces de poner nuestro cuerpo normativo en sintonía con la legislación nacional, hecho que permite dar armonía y sistematicidad a las disposiciones que elaboramos en nuestro rol para regular distintos aspectos de la vida comunitaria.

Así mismo, en este acto convertiremos en ley una propuesta que tiene origen en dos proyectos diferentes tanto en la matriz de pensamiento de los autores como en la temporalidad de su presentación. Esta particularidad habla del sano ejercicio de la búsqueda del consenso cuando las ideas que nos mueven persiguen un bien común y resuelven el inconveniente de un amplio colectivo social.

Finalmente, se suma a esta cadena de buenas intenciones el fuerte acompañamiento de asociaciones de la sociedad civil que han trabajado y apoyado la iniciativa que hoy proponemos sancionar.

La letra final de la ley dirá que la Provincia de Córdoba se incorpora a la Red Federal de Registros de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, pero los legisladores en general, y los vecinos que anhelan realizar el gesto pleno de amor que consiste en la adopción en particular, sabemos que abrimos una amplia puerta para la concreción de un deseo de unión.

Nos toca a nosotros, como representantes del pueblo y como Poder del Estado, disponer de un mecanismo que contribuya de modo significativo a solucionar una demanda que refleja una clara demostración de amor, desinterés y altruismo por parte de personas que ofrecen su cariño y comprensión para hacer más digno el tránsito por esta vida de niñas, niños y adolescentes de la Provincia de Córdoba.

No ignoramos que las familias biológicas son el ámbito natural para el desarrollo de las vidas de niñas y niños, pero tampoco desconocemos que muchas veces, por las razones o sinrazones que fueran, ese vínculo ideal no se cristaliza y termina siendo un factor perturbador.

Como uno de los Poderes del Estado provincial nos corresponde poner en funcionamiento los órganos competentes para proteger los derechos de esos niños y niñas y ofrecerles una familia que

pueda darles el amor y el cuidado que necesitan; una familia cuya evaluación y selección sea criteriosa y ajustada, velando por la preservación del lugar de origen y el centro de vida de los pequeños. Recién cuando esa prioridad no sea posible se podrá habilitar el trámite a otras jurisdicciones nacionales también adheridas.

Todos aquellos factores procesales, técnicos, jurisdiccionales fueron debatidos en las respectivas comisiones, sin que ninguna diferencia de criterio impidiera avanzar. Agradezco, entonces, a los colegas legisladores que pusieron su empeño y predisposición para lograr los consensos necesarios para que hoy podamos estar dando una respuesta concreta a vecinos que, de modo individual u organizados en distintas localidades de la Provincia de Córdoba, trabajan por desarrollar su vocación y conseguir una posibilidad de ser convocados frente a casos de niñas, niños y adolescentes en estado de adoptabilidad en esta Provincia.

La norma que aprobemos también les posibilita ser considerados por otra jurisdicción, terminando de esta forma con el largo peregrinar por todo el país en búsqueda de un niño que sea dado en adopción.

Señora presidenta, señores legisladores: siento que estamos poniendo un pequeño grano de arena cuyos resultados, por fortuna, se multiplicarán de modo anónimo en un verdadero efecto dominó, cuyo primer movimiento comienza con la aprobación de esta virtuosa norma, tanto por el trabajo que inspiró hacia adentro de la Legislatura, como por el objetivo de amor que la inspira. De modo que solicito, en nombre de mi bloque, el acompañamiento del resto de mis pares.

Gracias, señora presidenta y señores legisladores, y gracias a quienes nos acompañan y han trabajado tanto por esta iniciativa.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general los proyectos de ley 14583/L/14, 9567/L/12 y 14407/L/14, compatibilizados, tal como fueran despachados por las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba en general.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.

-Se votan y aprueban los artículos 1º, 2º y 3º.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el proyecto en general y en particular.

Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

Muchísimas gracias a quienes han estado presentes, y aprovechamos la oportunidad para saludarlos, deseando que cada uno llegue a su hogar para acompañar a quienes la vida hizo que estuvieran cerca de ustedes. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Continuamos con la sesión.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: retiro las dos cuestiones de privilegio planteadas al legislador Cid.

Sra. Presidenta (Pregno).- Se deja constancia en el Diario de Sesiones.

Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme la acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al punto 68 del Orden del Día, correspondiente al expediente 14121/L/14.

Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlos.

-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.

-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Roffé.

Sr. Roffé.- Señora presidenta: este proyecto es un pedido de informes, dirigido al Ministerio de Desarrollo Social, en referencia a los fondos que se derivan desde la Lotería a ese Ministerio.

De acuerdo a la Ley 8665, de creación de la Lotería de Córdoba, el juego -es bueno decirlo: a pesar de los efectos perjudiciales que tiene- está monopolizado por el Estado, y juntamente con ese principio se entiende que los fondos o las utilidades de la Lotería tienen que ser destinados al Ministerio de Desarrollo Social para que lleguen a los sectores más carecientes de la sociedad, a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. Y un poco cierra el círculo porque, en realidad, el juego no beneficia a nadie; perjudica a todos aquellos que entran en el circuito del juego, de la ludopatía, que acarrea serios problemas sociales y también perjudica a las familias. Pero el Estado monopoliza eso, situación que en otros países no ocurre, y los fondos tienen que llegar a los sectores mencionados.

¿Qué ocurre en la Provincia de Córdoba? Analizando la cuenta de inversión del ministerio, del Ejercicio 2013, uno observa que los fondos enviados por la Lotería al Ministerio de Desarrollo Social tienen una subejecución muy importante. Tengámoslo en cuenta que la ley es muy clara en este sentido. ¿Qué significa esto? Si uno presta atención al documento de la Lotería de Córdoba denominado “Anticipo de Utilidades a Obras de Promoción y Asistencia Social”, podrá observar cuánto es el monto de dinero que deriva la Lotería al Ministerio de Desarrollo Social. Y en 2013 la Lotería derivó 177 millones de pesos; la Lotería cierra el año al 30 de noviembre, por lo tanto, hay que sumarle lo de diciembre, es decir, en 2013 mandó 180 millones de pesos al Ministerio de Desarrollo Social.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Ahora bien, ¿qué dice la ley? La Ley 8665 explica muy bien cuáles son los programas que se tienen que desarrollar con los fondos que manda la Lotería. Entonces, es importante conocer cuáles son los programas. Por ejemplo, para el Programa 659 –Atención Integral para las Personas Mayores–, que tenía un presupuesto de 57 millones, se pagaron 15 millones; estamos hablando del programa para personas mayores, carecientes, que no tienen ninguna cobertura. El Programa “Turismo Social” tenía presupuestado 24 millones y se pagaron 14 millones; para el Programa “El Niño y el Adolescente en Conflicto con la Ley Penal”, de 11 millones de pesos se pagaron 4 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando cuando decimos niños y adolescentes en conflicto con la ley penal? Estamos hablando, por ejemplo, del Complejo Esperanza, en el que tuvo que intervenir un juez de la Provincia y ordenarle al Poder Ejecutivo que solucionara su situación, que no solamente tiene problemas edilicios, sino también de gestión, denunciados por la presidenta del bloque del Frente Cívico, que tuvo que poner la pierna entre las dos puertas porque si no, no podía entrar al Complejo Esperanza, y cuando entró sacó las fotos que se publicaron; así se hizo público lo que allí pasaba y, a través de un recurso de amparo de legisladores, intervino el juez. Fíjese, señora presidenta, la Lotería le manda 11 millones de pesos al Ministerio, y éste utiliza 4.300.000 pesos.

¿Por qué el Ministerio no usa la plata que le manda la Lotería? Este dinero no depende del Ministro de Economía, no es que el Ministro autorice o no autorice; este dinero pasa de la Lotería todos los meses a la cuenta de Desarrollo Social.

Fíjese, el Organismo de Gestión Asistida –OGA– que nombraba el legislador Birri: 14.000.000 de pesos, pagaron 11.000.000; Fondo de Prevención de la Violencia Familiar: 7.500.000 pesos, pagaron 2.500.000. El problema más importante que tiene la sociedad en este momento dentro del universo de la violencia es la violencia familiar, que está creciendo día a día, y el Ministerio, en vez de invertir todo ese dinero y más, de 7.500.000 de pesos que le pone la Lotería invirtió 2.500.000.

Así podemos seguir, pero con un agravante: si analizamos el año 2012 veremos que pasó exactamente lo mismo. Es decir, en el 2013 se ejecutaron 60.000.000 de pesos, y en el 2012 pasó exactamente lo mismo: tenían que ejecutar 178.000.000 de pesos, pero ejecutaron 125.

Ahora, nos preguntamos: ¿a dónde va a parar esa plata?, ¿a Rentas Generales?, pero ¿por qué va a parar a Rentas Generales si esto está establecido por ley? La ley le dice a la Lotería que las utilidades pasan a Desarrollo Social para cubrir estas falencias sociales, pero Desarrollo Social recibe el dinero y no cumple con el objetivo.

Entonces, señora presidenta, creo que este pedido de informes tiene que ser contestado por el Poder Ejecutivo; no sé si esto es falta de gestión, pero sí podemos asegurar que no se está cumpliendo con la ley, y no se está cumpliendo con ella respecto de los sectores más vulnerables y más conflictivos, como mencioné anteriormente.

Así que, señora presidenta, creo que el Ejecutivo tiene que contestar con lujo de detalles qué pasó con la plata en el año 2012, qué pasó con la diferencia en el año 2013, y por qué subejecuta los programas sociales que tienen fondos de la Lotería y no los lleva adelante.

Muchas gracias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Fernández.

Sra. Fernández.- Señora presidenta: en principio, nuestra voluntad es transparentar todos los números, responder las inquietudes de la oposición y aclarar todas las dudas que existan al respecto.

Los ingresos efectivamente recibidos por el Estado en concepto de utilidades de la Lotería de Córdoba, conforme a la Ley 8865, para el año 2013 son de 182.206.000 pesos, y la información está en las planillas correspondientes de ingresos de la Cuenta de Inversión de 2013; no hay que confundir ese dato con el devengado al 30 de diciembre de 2013 en la ejecución de la Lotería, que asciende a 183.400.000 pesos, ya que parte se terminó de remitir en los primeros meses de 2014. Tampoco debe confundirse con el dato de los estados contables de la Lotería, ya que el ejercicio de este organismo no coincide con el ejercicio fiscal, porque va desde el 1º de diciembre de 2012 –en este caso- al 30 de noviembre de 2013.

Ahora, entrando a la ejecución de los programas financiados –y en esto me voy a detener- con las utilidades de la Lotería, voy a detallar programa por programa qué es lo que se hace, qué es lo que se presupuestó, qué es lo que se ordenó pagar –lo ejecutado- y qué es lo que se pagó.

Primero, con respecto al Programa 652, que tiene el título “Desarrollo Social” -cuenta especial 8665-, se trata de todo lo que es emergencia social. Esto quiere decir todo lo que viene por demanda espontánea –una familia desesperada que tiene que viajar o que se necesita, a lo mejor, por una lluvia, un techo, chapas, etcétera. El año pasado se atendieron 16.000 personas por demanda espontánea en la ventanilla de Emergencia Social. Lo presupuestado fue de 83.499.000 pesos; lo ordenado a pagar, 81.585.295 pesos, y lo efectivamente pagado sumaron 72.255.833 pesos.

Con respecto al Programa 659, Atención Integral al Adulto Mayor -hay que señalar que se atienden en municipios y comunas de toda la Provincia de Córdoba 15 mil adultos mayores y 6 mil en Capital-, lo presupuestado ascendió a 57.252.000 pesos; lo ordenado a pagar fue de 51.899.000 pesos y lo pagado efectivamente contabilizó 15.440.000 pesos.

Con relación al Programa 668, Turismo Social –a las 465 plazas que tenemos en el complejo turístico de Santa María de Punilla, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, arriban contingentes de todas las provincias, compuestos por adultos mayores, estudiantes de sexto grado y grupos juveniles-, lo presupuestado fue de 24.142.000 pesos; lo ordenado a pagar, 24.128.716 pesos, y lo realmente pagado sumó 14.516.717 pesos. Vale remarcar que en este complejo hay 450 plazas cubiertas los 365 días del año.

Yendo al Programa 669, de la Erradicación del Chagas, lo presupuestado fue de 396.000 pesos; lo ordenado a pagar, 203.623 pesos, y lo efectivamente abonado ascendió a 124.884 pesos. Este fondo se destina a los gastos operativos para la erradicación del Chagas de las 1500 viviendas que se hicieron desde el gobierno de Schiaretti a la fecha.

Con respecto al Programa 670, Complemento Nutricional para Grupos Vulnerables, lo presupuestado fue de 20.939.000 pesos; lo ordenado a pagar, 20.749.099 pesos y lo pagado sumó 19.403.507 pesos. Aquí tenemos módulos alimentarios para enfermos oncológicos, 500 enfermos de HIV que reciben módulos alimentarios específicos para esta dolencia –bastante onerosos–, para celíacos, etcétera.

En el Programa 671, de Políticas de Asistencia al Niño y al Adolescente, lo presupuestado ascendió a 7.949.000 pesos; lo ordenado a pagar fue de 7.418.000 pesos y lo pagado fue de 6.948.000 pesos, junto al Programa 672, de los Menores en Conflicto con la Ley Penal. En estas dos partidas se han atendido 1400 niños, adolescentes y jóvenes dentro de todo el sistema de la SeNAF.

En cuanto al Programa 675, Fortalecimiento Familiar, lo presupuestado fue 186 mil pesos; lo ordenado a pagar, 178 mil pesos, y lo efectivamente pagado fueron 178 mil pesos.

– Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

¿Qué tenemos aquí? Por ejemplo, los pañales y la leche para las familias acogedoras. Digo esto para que sepamos de qué estamos hablando cuando mencionamos los números, cuando vemos el Presupuesto y su ejecución.

En el Programa 676 -los OGAs que citó otro legislador de la oposición–, tenemos 21 OGAs que hogarizan a más de 370 niños. Lo presupuestado fue de 14.044.000 pesos, lo ejecutado de 14.043.000 pesos y lo pagado efectivamente 11.733.506 pesos. En las OGAs no solamente se aloja a los niños hogarizados sino que también se los capacita -a niños, adolescentes y jóvenes–; son cerca de 12 organizaciones que contienen aproximadamente a 780 jóvenes.

En el Programa 677, Descentralización Territorial, tenemos las 13 UDEL. ¿Qué son las UDEL? Son organismos descentralizados. La organización territorial promueve mecanismos para garantizar la accesibilidad al ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Provincia. Estas Unidades de Desarrollo Local existen en Alta Gracia, Bell Ville, Cosquín, Cruz del Eje, Deán Funes, Río Cuarto, Río Segundo, La Carlota, Laboulaye, San Francisco, Villa Dolores, Villa Nueva, etcétera. Lo presupuestado para este programa fue de 253.000 pesos –estamos hablando de los gastos operativos que tienen estas UDEL, que son el Ministerio descentralizado con todos sus servicios–, lo ordenado a pagar de 68.921 pesos y lo pagado de 68.921 pesos.

Para el Programa Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar se presupuestó 7.500.000 pesos, se ordenó pagar 2.566.166 pesos y se pagó 2.531.240 pesos. Por ejemplo, se han atendido con subsidios a víctimas de violencia familiar, de 2.000 pesos promedio, a cerca de 264 víctimas.

Sé que es aburrido hablar de números, pero cuando existe voluntad de transparentar...

Señor presidente: le pido silencio.

Sr. Presidente (González).- “Niños” legisladores: por favor, la legisladora Nadia Fernández está haciendo uso de la palabra, debemos respetar a la oradora. Les pido que hagan silencio.

Sra. Fernández.- No por mí, francamente, sino porque cuando se pide, se exige transparencia, hay que tener paciencia para escuchar.

Sr. Presidente (González).- Continúe con la palabra, legisladora Fernández.

Sra. Fernández.- En el Programa 687, Cuenta Especial Clínicas, tenemos la asistencia por adicciones y por casos psiquiátricos a niños y jóvenes. Son seis clínicas con 172 víctimas, entre niños y jóvenes.

Para terminar a grosso modo con el detalle, fíjense que tenemos un presupuesto de 1.330.000 pesos, lo ordenado a pagar es de 1.328.812 pesos y lo pagado de 861.322 pesos.

Señor presidente: ¿qué quiero decir con esto?, ¿qué nos interesa aclarar? Que en total se ordenaron pagar 212.808.000 pesos de 228.494.000 pesos presupuestados; es decir que se ejecutó -no hubo subejecución- el 93 por ciento del total de los fondos girados por la Lotería de Córdoba para asistir a personas en situación de extrema vulnerabilidad social en todo el territorio provincial.

No sé si tiene alguna duda, pero con esto doy por terminada la contestación del informe, señor presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.

Sr. Roffé.- Señor presidente, resultaron muy interesantes los datos brindados por la legisladora preopinante.

La pregunta que sigue es: ¿por qué el Ministerio de Desarrollo Social demora los pagos? Porque los ingresos de la Lotería son mensuales.

Por otro lado, la legisladora ha dado algunos datos importantes a tener en cuenta, como por ejemplo en el rubro Clínicas: Asistencia para Adicciones, 72 víctimas. En la Provincia de Córdoba hubo 72 víctimas y no estamos haciendo nada con relación a esto, en adicciones no estamos haciendo nada.

En cuanto al tema de Violencia Familiar, la legisladora Fernández certifica que de 7,5 millones se pagaron 2,5 millones, lo que significa que este dinero no se está usando en violencia familiar.

Por último, quiero mencionar que en cuanto a la Atención Integral al Adulto Mayor, basta hablar con los intendentes para saber el atraso que tiene el pago de los fondos que envía el Ministerio a las intendencias para todo lo relacionado a la atención de personas mayores, atraso que no tiene ninguna explicación porque –como ya mencioné– los fondos a la Lotería ingresan mensualmente.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.

Sra. Fernández.– En principio, dije 172 víctimas que devienen en casos psiquiátricos, en algunos casos. En el último programa Clínicas, se pagaron 148.416.000 pesos, lo que no quiere decir, de ninguna manera, que la diferencia se haya asignado a otros fines, como se dice en el fundamento del pedido de informes, sino que todo lo recaudado, más los remanentes de ejercicios anteriores, se destina a pagar todo lo ordenado a pagar que son 212 millones de pesos. Tanto lo que se alcanzó a pagar en el transcurso del ejercicio, que son 148 millones de pesos, como lo que se pagó en los primeros meses de 2014, que son, aproximadamente, 45 millones de pesos correspondientes a 2013.

Además, hay que saber que si hubiese un saldo de toda la Cuenta Especial, después de cancelar todo lo ordenado a pagar, se transfiere al ejercicio siguiente, no se reasigna a ningún programa.

Para finalizar, y –espero– para despejar toda las dudas, con respecto al punto 2 del informe, que pregunta por los 28.613.540 pesos, en realidad fueron para pagar expedientes que andaban dando vueltas de los años 2012 y 2013. Cuando las demoras, por ejemplo, de las OGAs existen, tienen que ver con las demoras para rendir los fondos. En reiteradas oportunidades manifestamos que las organizaciones tienen muchos inconvenientes, esto no quiere decir que no se les pague. Por ejemplo, algunas organizaciones recién terminaron de rendir lo gastado en 2013, por lo tanto, cobrarán lo correspondiente a 2013 en 2014. Esto tiene que ver con una demora de la organización y no del Estado, que a veces existe por el cursograma que hay que cumplir.

Entiendo que está todo más que respondido, por lo tanto, solicitamos el archivo del informe.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– En consideración la moción de adoptar como despacho de Cámara en comisión el archivo del expediente 14121.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.

Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.

-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión, que aconseja el archivo del proyecto 14121.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado el despacho.

En consecuencia, es enviado al archivo el proyecto 14121.

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieran estado parlamentario en la presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyectos de declaración: 14804, 14806, 14809, 14810, 14811, 14815, 14816, 14817, 14818, 14820, 14821, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14830 y 14831/L/14.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 14700, 14756, 14757, 14783, 14792, 14793, 14794, 14795, 14796, 14800, 14801, 14806, 14809, 14810, 14811, 14815, 14816, 14817, 14820, 14821, 14824, 14825, 14826, 14827, 14828, 14830 y 14831.

En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.

—Se vota y aprueban.

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

Sr. Presidente (González).- Aprobados.

Tiene la palabra la señora legisladora Frenchia.

Sra. Frenchia.- Señor presidente, solicito quede consignada mi abstención para la votación del proyecto 14830.

Sr. Presidente (González).- Queda consignado que no votó, señora legisladora.

Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos 14797/L/14 y 14804/L/14, con mociones de tratamiento sobre tablas, que serán leídas a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 20 de agosto de 2014.

Sra. Presidenta de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Mónica Pregno

S. / D.

De mi mayor consideración:

Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas

ZEUS PLATAFORMA – Legislativa Unificada

para el proyecto 14797/L/14, referido a las intimidaciones a periodistas de los SRT por parte del Jefe de Policía, comisario Julio César Suárez, y sobre el operativo policial efectuado el pasado viernes 15 de agosto en el barrio Los Cortaderos.

Nos enfrentamos ante un hecho de suma gravedad, el brutal operativo policial que terminó con el saldo de una decena de vecinos heridos, luego fue respaldado por la máxima autoridad de la fuerza policial, el comisario Suárez, cuando primero mediante llamados telefónicos y luego apersonándose en el Canal, amenazó al periodista Dante Leguizamón, quien realizaba una cobertura periodística del operativo.

Las amenazas del Jefe de Policía a los periodistas son propias de un régimen fascistizante y constituyen un hecho delictivo que debe ser castigado; pero, además, revelan que el comisario Suárez no actúa como responsable de preservar la vida y la seguridad de la población, sino como el jefe de una facción que está sospechada por sus vínculos con las redes de narcotráfico y del crimen organizado, y responsable del gatillo fácil y el abuso policial que se vive en los barrios de Córdoba.

La Legislatura provincial debe intervenir de manera inmediata sobre hechos de esta naturaleza, pues es necesario erradicarlos de plano ya que constituyen una violación a la libertad periodística y a las libertades democráticas de la población. Es necesario repudiar categóricamente el accionar de la policía, a su vez que se requiere la citación del ministro del área para comparecer ante este Cuerpo e informar sobre estos hechos y muchos otros expresados en decenas de pedidos de informes.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares en la Legislatura provincial que aprueben el tratamiento sobre tablas del citado proyecto.

Saludo a usted muy atentamente.

Cintia Frencia

Legisladora provincial

Córdoba, 20 de Agosto de 2014.

A la Señora Vicegobernadora

de la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 14804/L/14.

El presente proyecto es para citar, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial, al señor Ministro de Gobierno y Seguridad y solicitar explicaciones al Jefe de la Policía respecto a la intimidación a un periodista.

Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.

Liliana Montero

Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas de los proyectos de las legisladoras Frencia y Montero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

– Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.

Sra. Frencia.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la moción efectuada con relación a estos proyectos presentados por el conjunto de los bloques de la oposición –al menos tres fueron firmados por todos– y que van en un mismo sentido: expresar, en primera instancia, la preocupación frente a los hechos ocurridos el pasado viernes 15 de agosto, no sólo por las intimidaciones que recibieron tanto el periodista Dante Leguizamón –que hizo una denuncia penal– como otros profesionales de los SRT, por parte ni más ni menos que del propio Jefe de la Policía de la Provincia. A esto se suma que estas intimidaciones tuvieron por objeto encubrir la responsabilidad de las fuerzas policiales en un brutal

operativo que se desplegó en la fecha mencionada, que terminó con decenas de heridos en barrio Los Cortaderos.

No sorprende que se haya desplegado semejante operativo –que no sólo contó con la participación de la Policía de la Provincia de Córdoba sino también con la de agentes del ETER, personal de Infantería y demás– en un barrio donde murió –hace menos de tres semanas, víctima del “gatillo fácil”– un joven de 18 años, a manos de dos oficiales de las fuerzas policiales de la Provincia.

No extraña que se haya desplegado semejante operativo policial en un barrio que está profundamente movilizado, pidiendo justicia por Alberto “Were” Pellico y repudiando los casos de “gatillo fácil” que, en lo que va del año –al menos los que han cobrado estado público, a los que se suma la inmensidad de casos que no– son siete en nuestra Provincia.

De tal modo, el accionar del Jefe de Policía de ninguna manera se soluciona con una disculpa, porque de ninguna manera se trata aquí de una valoración personal o de un exabrupto de la máxima autoridad de la fuerza policial, sino de un accionar político –consciente y deliberado– que pretende amparar la impunidad con la que el aparato policial –profundamente cuestionado en nuestra Provincia por estar vinculado a las redes de narcotráfico, a las bandas delictivas y demás– se cobra en nuestra Provincia la vida de muchos chicos, siendo el responsable directo del abuso permanentemente denunciado en las barriadas cordobesas.

Es de extrema gravedad el accionar del Jefe de Policía, por lo que esta Legislatura debe condenarlo y exigirle al Poder Ejecutivo provincial que lo remueva de su cargo, porque ha quedado muy en claro que Julio César Suárez no vela por la seguridad de los ciudadanos y vecinos de Córdoba sino por la integridad de un aparato descompuesto que los reprime, siendo cómplice de la inseguridad de la peor forma, esto es, coartando las libertades democráticas de prensa y de expresión.

Por estas razones, solicito que la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba reconsidere la votación de la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto que presentamos desde el bloque de Frente de Izquierda y los Trabajadores –así como la de los demás proyectos referidos a este tema–, que se expida a favor de la remoción del Jefe de Policía de su cargo y que cite, en un plazo perentorio –que no puede ser mayor a 48 horas–, al Ministro de Gobierno y Seguridad, Walter Saieg, para que dé explicaciones, no sólo sobre el accionar del Jefe de Policía de la Provincia sino también sobre el operativo desplegado el 15 de agosto pasado en barrio Los Cortaderos, respondiendo, a su vez, los otros pedidos de informes que sistemáticamente han sido presentados –al menos desde nuestro bloque– y luego desconocidos, pese a abordar temas tan sensibles y valiosos para nuestra ciudadanía, como son la seguridad, la vida y la integridad física de los jóvenes de las barriadas de nuestra Provincia.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).– Tiene la palabra la señora legisladora Montero.

Sra. Montero.- Señor presidente: solicito la reconsideración en la votación del proyecto presentado en conjunto con todos los bloques, y también el presentado por otros legisladores en relación a la situación que viviera un trabajador de la prensa el pasado día viernes.

Haciendo memoria, señor presidente, recordé que el año pasado el Gobernador de la Provincia de Córdoba dictó el Decreto 525, que luego envió -como tantos otros- a esta Legislatura para que lo ratificáramos cual si fuésemos una “escribanía de lujo”, y que tenía por fin garantizar lo que ya está garantizado en las Constituciones nacional y provincial y en los pactos que suscribimos internacionalmente, que tiene que ver con la libertad de prensa. En aquel momento decíamos que este decreto era, una vez más, la puesta en escena del Gobernador de la Provincia en su carrera presidencial y, lamentablemente, no nos equivocamos.

Señor presidente: Córdoba es, según dice FOPEA, la segunda provincia en relación a los ataques a la prensa; pero lo que pasó el día viernes, más allá de la persona del periodista -a quien manifestamos nuestra solidaridad-, adquiere una gravedad institucional inusitada. No fue -como bien se dijo acá- un exabrupto o un hecho impulsivo en un momento determinado incontrolable; no, el Jefe de la Policía -que está armado y, además, tiene bajo su órbita a 23 mil agentes armados- se subió a un auto, llamó por teléfono, se dirigió en ese auto a un canal de televisión, se bajó, discutió y volvió a llamar por teléfono. ¡Mire si tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que estaba haciendo! Por eso es grave el hecho y no alcanzan las disculpas, no fue un momento sino una seguidilla de sucesos en donde debería haber primado la razón. Entonces, la pregunta es: ¿quién conduce la fuerza policial cuando su jefe no tiene el freno inhibitorio de la razón sobre los impulsos?

Esto es grave y complicado, por eso pedimos que se brinden las explicaciones, y no alcanza con que diga que pide disculpas y que no va a twittear más. ¡Fíjese la caradurez del Jefe de Policía!, como si el problema fuera un twitter. El problema es la acción desmedida de intentar controlar a la prensa y de acallar una voz en disidencia con el accionar policial. Realmente lamentable, típico del caso en que se debería decir: “no aclare que oscurece, jefe”.

En segunda instancia, lo grave es la falta de respuesta política del Gobierno de Córdoba, y lo dijimos en los medios. Cuando el Gobernador De la Sota se sentó frente a los bloques opositores nos dijo que reconocía que el error de estos catorce años había sido dejar en manos de la Policía la política de seguridad pública. La política de seguridad debe estar en manos de la política, el responsable es el Gobernador de la Provincia y, en este caso, del Ministro de Gobierno y Seguridad. No alcanza con una disculpa, con alguien que diga que no va a mandar más twitter, necesitamos que el Ministro de Gobierno y Seguridad concorra a esta Legislatura a dar las explicaciones y a hacerse cargo políticamente del accionar del Jefe de Policía, porque el responsable último de este jefe es el Gobernador de la Provincia, y el Ministro de Gobierno.

Por estas razones, solicitamos la reconsideración de la votación.

Nada más.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.

Sr. Yuni.- Señor presidente: desde el radicalismo queremos agregar a lo ya dicho por los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra que deberíamos reflexionar sobre algo que está en juego en la sociedad argentina: los valores, esos estándares morales que guían nuestro comportamiento cotidiano y que nos mueven a tomar decisiones en cada instante de nuestras vidas. Esos valores son una construcción social, y el respeto es uno de esos valores que aprendemos en la sociedad en la que vivimos.

El respeto por las personas implica el reconocimiento del otro como individuo, el reconocimiento de su libertad y su autodeterminación en relación con las opciones individuales que tienen las personas. El irrespeto, por contrapartida, es un disvalor y constituye un menosprecio por el otro, generalmente tiene por causa el ejercicio indebido e inmorale de un poder, que puede ser individual o social, para limitar aquella libertad y autodeterminación. A veces también, por su misma magnitud, el irrespeto puede incluso constituir un delito punible en los términos del ordenamiento legal vigente.

Reflexionamos sobre esto porque los hechos que estamos analizando en esta Legislatura, que se vinculan con el comportamiento del Jefe de Policía, Julio César Suárez, tienen que ver con este valor que es el respeto. Por un lado, como se informó, esos hechos están siendo investigados por los órganos judiciales competentes, por lo que seguramente el reproche jurídico por la conducta del Jefe de Policía provendrán de la misma Magistratura y, por ello, poco podremos agregar nosotros, en esta Legislatura, a la condena o absolución que se decida, por un elemental respeto por el servicio y la actividad del Poder Judicial. Por otro lado, señor presidente, estos hechos, a juzgar por la denuncia y por el reconocimiento efectuado por el propio comisario involucrado, constituyen sin lugar a dudas una falta de respeto, en términos del quebrantamiento de un deber moral hacia el otro.

La conducta del Jefe de Policía, aunque pueda no tipificar como un delito, sí constituye una evidente violación de un deber ético que esta Legislatura, desde cualquier consideración moral que se realice, no puede tolerarlo de quién hoy es el más alto funcionario policial de nuestra Provincia.

Señor presidente: la conducta de este Jefe de Policía constituye ostensiblemente un menosprecio por la persona de un periodista de nuestro medio, un comportamiento que tiene su origen en el ejercicio indebido e inmorale del poder que la sociedad le otorgara para que sea ejemplo de valores y no para que lo use con la finalidad de limitar la libertad y autodeterminación de un comunicador social o de cualquier otra persona mediante amenazas e intimidaciones.

El Jefe de Policía, señor presidente, como sabrá usted, detenta en su persona un poder inmenso, él es el conductor de una de las fuerzas de seguridad a la que la sociedad confía el ejercicio de la coerción pública. Pero, al mismo tiempo, el Jefe de Policía tiene obligaciones inconmensurables porque principalmente a él le corresponde velar por la seguridad de más de 3 millones de cordobeses; él debe ser ejemplo de sus casi 20.000 subalternos; él debe enseñar los valores que la sociedad ha construido, y tiene primordialmente un deber de respeto hacia cada uno de nosotros, los millones de cordobeses que confiamos en él; tiene la obligación cívica de comportarse mejor y con mayor ejemplariedad que cualquier otro ciudadano, más aún en tiempos en que la sociedad cordobesa todavía observa con recelo

a las fuerzas que él representa por hechos que son recientes y por demás notorios -3 y 4 de diciembre del año pasado.

Señor presidente, citamos todos los bloques de la oposición al Ministro Saieg, y esa citación puede tener distintos motivos. Está pendiente que dicho Ministro brinde a esta Legislatura un detallado informe sobre la inseguridad en nuestra Provincia y sus causas, sobre el Programa Seguridad Ciudadana aún pendiente, o sobre las condiciones en que se prestan los servicios de seguridad, entre otros. Seguramente tendremos oportunidad de discutir sobre estos temas en otra sesión.

El motivo de la citación al Ministro en esta ocasión es otro y más puntual: pretendemos que sea el ministro político, el responsable, quien en este recinto nos diga con absoluta franqueza si el actual Jefe de Policía está en condiciones de ejercer moralmente el inmenso poder que se le ha confiado; que nos diga con sinceridad si este comisario se encuentra en condiciones de dirigir la fuerza policial que está bajo su mando con la ejemplariedad que esa fuerza requiere en estos tiempos; que nos asevere el Ministro que la tranquilidad y seguridad de todos los cordobeses se encuentran debidamente garantizadas por el gobierno que los designó; que afirme el Ministro en esta Legislatura, en definitiva, si el señor Jefe de Policía, habida cuenta de la gravedad de sus faltas morales que desde esta bancada reprochamos una vez más, se encuentra en condiciones de seguir ejerciendo sus funciones.

Sr. Presidente (González).- Legislador Yuni, le voy a pedir que redondee sus conceptos porque ha agotado su tiempo, según el Reglamento.

Sr. Yuni.- Le agradezco, señor presidente, y quédese tranquilo que lo voy a sintetizar.

Todos los cordobeses, aparte de cumplir la ley, tenemos el derecho a que se nos reconozca como individuos y que nos reconozcan igualmente nuestra libertad y autodeterminación. Todos tenemos derecho a exigir respeto, especialmente de quienes tienen obligación de protegernos, y que no se nos violente con amenazas o intimidaciones. Queremos que el Ministro nos diga si comparte estas afirmaciones y valoraciones.

Muchas gracias, y pedimos al bloque de la mayoría que reconsidere la venida del Ministro.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente, seré muy breve.

Como es público y notorio en esta Legislatura, estuve ausente cuando se precipitó una serie de acontecimientos por los cuales se pide que venga el Ministro de Seguridad de la Provincia a dar las explicaciones del caso de lo que hubiera pasado, lo cual me parece muy bien.

Pero esperaba que a mi vuelta hubiera aparecido Viarnes. Ese es uno de los temas que quiero preguntarle al Ministro de Seguridad de la Provincia; no solamente en lo que respecta al comisario Suárez, sino dónde está Viarnes. Los cordobeses no tenemos noción de lo que significa la ausencia de Viarnes. Viarnes es la puerta que nos lleva a verificar plenamente si la Policía de la Provincia de Córdoba tenía severos problemas con el narcotráfico.

Entonces, adhiero a lo que se está pidiendo, pero no me puedo olvidar del tema Viarnes, y que el tema Suárez no nos lo haga olvidar.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Lucca.

Sr. De Lucca.- Señor presidente: quiero aprovechar esta ocasión para expresar mi profunda preocupación y enérgico repudio a los recientes hechos que nuevamente relacionan al Jefe de Policía Julio César Suárez con actitudes patoteriles, fascistas y autoritarias, propias de épocas oscuras de nuestra historia.

En un país donde rige plenamente la Constitución nacional, parece que nuestra querida Provincia viviera en una isla donde las garantías se encuentran suspendidas y dependen del más impune arbitrio de la autoridad policial.

No voy a repetir los detalles de las amenazas al periodista Dante Leguizamón que, afortunadamente, son de público conocimiento, sino a hacer algunas reflexiones del terrible hecho que analizamos.

Esta acción del Jefe de Policía de la Provincia, Julio César Suárez, no es aislada señor presidente; se enmarca dentro de una política represiva de este Gobierno, porque la Policía Provincial nunca fue tocada después de la dictadura y nos seguimos encontrando dentro o cerca de la fuerza con partícipes o cómplices directos de los hechos más aberrantes de otras épocas. Antes era el pelo largo o la barba la prueba de la peligrosidad de un joven; hoy lo es una gorrita y el color oscuro de la piel. Así, vemos esos corralitos infames en que exponen al escarnio público durante horas a jóvenes que detienen en la calle, y que a veces ni siquiera son del mismo barrio porque hay ocasiones en que son trasladados kilómetros y expuestos en barrios lejanos para mostrar la actividad de la fuerza policial.

En esta misma Legislatura tuve la oportunidad de repudiar las declaraciones sobre casos de “gatillo fácil”, en las que el señor Jefe de Policía justificaba la brutalidad policial acusando de delincuentes a las víctimas, adelantándose a cualquier acción judicial.

Tampoco es aislado en cuanto al accionar de la fuerza policial ya que, señor presidente, imagínese si el propio Jefe de Policía se cree con la impunidad para amenazar a un periodista públicamente, presentándose a un canal televisivo exigiendo que se dejen de emitir determinadas

opiniones, ¿qué podemos esperar entonces del accionar policial puertas adentro, protegidos por las paredes de una comisaría, la oscuridad de la noche o la soledad de los parajes de nuestra Provincia?

Tampoco entiendo dónde quedó aquel polémico Decreto 525 dictado por el Gobernador José Manuel de La Sota, copia de un DNU de Mauricio Macri, con el que pretende garantizar la libertad de expresión y de prensa y que esta Legislatura ratificó mediante una ley especial. Los que nos opusimos a ese engendro jurídico supimos que era una sobreactuación política nada más, que además de inconstitucional lo consideramos innecesario porque la libertad de expresión ya está protegida por la Constitución, los tratados internacionales y la ley de servicios audiovisuales. No era más que un simple reflejo de Macri para intentar quedar bien con la derecha nacional y el grupo Clarín en su pelea con el pueblo argentino, para posicionarse en su aventura presidencial. Recuerdo que el oficialismo justificó el proyecto del Gobernador al sostener que más allá de la discusión jurídica, se trataba de una expresión muy fuerte que hacía Córdoba en el ámbito de sus atribuciones para otorgar protección a medios de comunicación y periodistas.

¿Por qué no se pone ahora todo el esfuerzo de los tres Poderes del Estado provincial para proteger a aquellos que tanto declaman?

Señor presidente, señores legisladores, no podemos seguir viviendo en una Provincia militarizada que no respeta las garantías constitucionales ni los derechos de los ciudadanos. Tiene que haber un límite a estos atropellos, al “gatillo fácil” y al autoritarismo de las fuerzas seguridad; pensemos en nosotros, en nuestros hijos, ya que nadie está libre del accionar impune de los portadores de armas, que las usan en contra del pueblo que les ha confiado su seguridad.

Por último, señor presidente, veo que a fin de cuentas el único que dijo algo fue el Gobernador De la Sota, afirmando que no estaba enterado de tema. Tengo que decir que en este caso le creo al Gobernador, ya que mal podría estar enterado el primer mandatario provincial de lo que pasa en su Provincia cuando no está nunca en ella, ocupado como está en medios nacionales por su proyecto personal, alejado del proyecto colectivo que debería conducir y para el que el pueblo lo eligió.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: unas breves consideraciones sobre este tema que, en realidad, advertimos – al menos a nuestro juicio- que se trata de un eslabón más, grave por supuesto, de esta crisis que lleva largo tiempo y que tiene que ver con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Córdoba y, particularmente, con las políticas públicas de seguridad que Unión por Córdoba viene llevando adelante desde hace 15 años hasta la fecha sin interrupciones.

Quizás la punta del iceberg asomó el año pasado cuando, más o menos a esta altura de 2013, un cuerpo entero, el de Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia de Córdoba, se vio directamente “perforado” por el narcotráfico y por la visibilización, a través de una investigación periodística, de

procedimientos absolutamente ilegales. Tengamos presente que en aquella oportunidad fue también a través de una investigación periodística, y la primera reacción del señor Gobernador de la Provincia fue de tildarlas como de calumnias del periodismo hacia su Gobierno y hacia su Policía. Después siguió con la triste noche del 3 de diciembre, donde el amotinamiento de las fuerzas policiales, en una actitud absolutamente extorsiva, dejó indefensa a una sociedad entera a manos de una delincuencia organizada. Luego ocurrieron distintos eslabones más hasta este hecho absolutamente descalificador y patoteril del Jefe de la Policía de la Provincia.

Digo que esto ha sido un eslabón más porque estoy convencido de que este suceso –grave, por supuesto, y al cual no minimizo- va mucho más allá de ser un episodio. Como lo venimos planteando desde hace bastante tiempo a esta fecha, creo que son manifestaciones del fin de un paradigma que, quizás, como figuras más visibles tiene al propio Gobernador y a los sucesivos jefes de Policía que ha tenido las Fuerzas de Seguridad de la Provincia de Córdoba; el fin de un paradigma ya abandonado prácticamente por todos los gobiernos, al menos del mundo occidental, y que tiene distintas caras o manifestaciones. Algunas de las que tiene en Córdoba, por ejemplo, tienen que ver con una Policía mucho más preparada para el combate del delito menor, para detener al pibe que fuma un “porro” o para detener al “portador de rostro”, a jóvenes vulnerables a través de la figura del merodeo o, precisamente, para prepotear o perseguir a un periodista, como es el caso que nos ocupa, pero que es mucho más inerte e impotente para combatir el delito complejo, para combatir a las bandas criminales, para combatir el narcotráfico en donde, indudablemente, ha sido un fracaso tras otro el que ha tenido el Gobierno de la Provincia a través de su fuerza policial.

Por lo tanto, creo que este tiene que ser un eslabón más para debatir seriamente esta asignatura pendiente que tenemos en Córdoba y que tiene que ver con una profunda reforma de la institución policial, para debatir fuertemente nuevas políticas públicas de seguridad que, por supuesto, no pueden ser enclaves de los viejos paradigmas sino que tienen ser enclaves de políticas de seguridad democráticas.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración formuladas por las legisladoras Frencia y Montero.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 14818/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 20 de agosto de 2014.

A la Señora Vicegobernadora

De la Provincia de Córdoba

Cra. Alicia Pregno

S. / D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 14818/L/14 sea tratado sobre tablas en la sesión del día de la fecha, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento interno de la Legislatura.

Justifica la presente petición de tratar el proyecto la oportunidad de los hechos que fundamentan el proyecto referido; se trata de la declaración, expresando preocupación ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia que permite la apertura del slots casino en la ciudad de Río Cuarto las 24 horas, contrariando la ordenanza municipal.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.

Roberto César Birri

Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Birri.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

Tiene la palabra el legislador Birri.

Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación.

Esta presentación persigue el modesto objetivo de dejar un testimonio sobre una cuestión que queremos alertar a esta representación popular que es la Legislatura de la Provincia, sobre una cuestión que viene produciendo efectos devastadores, al menos en mi ciudad –y no tengo dudas que en gran parte de las ciudades-, en donde los tragamonedas y la industria del juego forman parte de la realidad cotidiana de muchas de nuestras comunidades.

En realidad, el tema, en nuestro caso, se remonta a fines del 2003, cuando gobernaba la ciudad de Río Cuarto el ingeniero Alberto Cantero, de Unión por Córdoba, y en un debate legislativo del Concejo Deliberante participaron concejales que prestaron su acuerdo votando favorablemente este emprendimiento -hoy más de uno debe estar arrepentido, algunos hoy son legisladores de la Provincia, pero no voy a dar nombres porque seguramente me van a pedir el derecho a réplica y vamos a perder bastante tiempo. Lo cierto es que en el 2003, entre De la Sota, Cantero, Gutiérrez y concejales de Unión por Córdoba le dan vía libre a la instalación de un casino con más de 100 máquinas tragamonedas en la ciudad de Río Cuarto.

Al principio fueron instaladas en la plaza central, lugar paradigmático porque del otro lado está el Banco de Córdoba y era un espectáculo doloroso ver cómo centenares o miles de hombres y mujeres que en ese momento, producto de una de las crisis más terminales que tuvo la República Argentina, cobraban los 150 pesos que daba el Plan Jefas y Jefes de Hogar, y luego de percibir ese magro recurso, casi como en un desfile de hormigas, cruzaban la plaza para meterse dentro del casino y gastarlo en el novel tragamonedas que debutaba de la mano de Unión por Córdoba en Río Cuarto.

A partir de allí los efectos fueron devastadores, se pueden medir en términos de letalidad en la salud: aparición de nuevas patologías como la ludopatía; se fracturaron familias enteras, y también –aunque quizás sea menos importante- afectaron la economía de la ciudad, toda vez que ha venido a operar como una suerte de aspiradora de recursos a punto tal que en estos 10 años la empresa CET ha embolsado, en términos de ganancias, más de 300 millones de pesos, lo equivalente a no menos de 1000 viviendas de clase media, tan necesarias en el marco del déficit habitacional que tiene la Provincia.

Las consecuencias han sido enormes en esos términos, muchas veces en esta Legislatura hemos dado cuenta de ello. Nuevos gobernantes de la ciudad de Río Cuarto, con mucha más sensibilidad que el anterior, quisieron poner aunque sea un límite para aminorar en parte estos efectos devastadores que sobre el núcleo familiar, la salud y la economía venían produciendo los tragamonedas, y quisieron, en el marco de una iniciativa del intendente -votado por todos los concejales de los distintos bloques- ni siquiera prohibir el juego sino simplemente limitarlo en el horario a algunas horas porque si no estaban funcionando las 24 horas, como lo escucha, señor presidente: en una ciudad no turística, las 24 horas las máquinas tragamonedas funcionando, y sabemos por distintas estadísticas y encuestas que son los sectores populares los que más acuden.

Por supuesto, la empresa inmediatamente impugnó ante la Justicia provincial esta modesta disminución o limitación en el horario y, recientemente, la semana pasada, mediante un fallo, el Tribunal Superior de Justicia declaró la inconstitucionalidad de esta ordenanza que -quiero dejar testimonio de su injusticia- atenta contra el principio de autonomía municipal, porque si los municipios no tienen el poder para regular el uso horario de un negocio o de un comercio, en este caso de un casino, ¿cuál es el poder de policía que tiene?

Señor presidente: un casino con más de doscientas máquinas tragamonedas, que trabaja 24 horas por día, imagínese el grado de perjuicio que hace a la población. En verdad es un fallo que defiende al juego, al poderoso empresario, por encima de la salud de la población.

Por ello, queremos dejar testimonio. Nos gustaría que esta Cámara en pleno adhiera a esta expresión de preocupación y, en esos términos, se motiva el presente proyecto de declaración.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Birri.

Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.

No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Elba Carmen Perugini a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

– Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

– Es la hora 18 y 47.

Dra. Silvana Sabatini

Directora del Cuerpo de Taquígrafos